



**JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA**

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

JUEZ: MARTHA HELENA QUINTERO QUINTERO

Referencia: **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Nº 11001-33-35-015-2022-00264-00**

Demandante: **RODRIGO ABADÍA MONDRAGÓN**

Demandado: **NACIÓN- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

Procede el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá a decidir el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de carácter laboral promovido por el señor **RODRIGO ABADÍA MONDRAGÓN**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.356.645, contra la **NACIÓN- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, controversia que se resuelve en esta sentencia.

Señala en esta demanda las siguientes,

PRETENSIONES

"PRIMERA: Que se inaplique la frase "constituirá solamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud"

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la respuesta al derecho de petición Nº Rad:20223100008921 del 15 de marzo de 2022.

TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución Nº 2-0507 del 9 de mayo de 2022, donde niegan las pretensiones.

CUARTA: Declarar que el señor RODRIGO ABADÍA MONDRAGÓN tiene derecho a que se le reconozcan las primas, cesantías, vacaciones, intereses e indemnizaciones y que a la fecha no han sido canceladas por la Fiscalía General de la Nación desde el 1 de agosto de 2017, fecha en la que ingresó a laborar en la Fiscalía General de la Nación.

CONDENATORIAS

QUINTA: Se condene a la Fiscalía General de la Nación a reconocer y pagar las primas, cesantías, vacaciones, intereses a las cesantías e indemnizaciones moratorias desde el 1 de agosto de 2017, como consecuencia del acuerdo firmado.

SEXTA: Condenar a la Fiscalía General de la Nación a indexar las sumas establecidas en el decreto 0382 de 2013,

SÉPTIMA: Se condene a la Fiscalía General de la Nación a pagar las sumas antes indicadas desde el 1 de agosto de 2017, hasta la fecha en que se haga efectivo el pago.

OCTAVA: Se condene a la demandada al pago de las costas y agencias en derecho del proceso.

(...)"

FUNDAMENTOS FÁCTICOS

Se enuncian como hechos principales de la demanda los que se resumen a continuación:

1. Mediante el Decreto 0382 de 2013, el Gobierno Nacional creó a partir del 01 de enero de 2013 una bonificación judicial a favor de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, la cual tiene un reconocimiento mensual y constituye factor salarial únicamente para el cálculo de la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud.
2. En razón de lo anterior, el demandante presentó el 24 de febrero 2022, ante la Fiscalía General de la Nación la solicitud para que se reliquidara la totalidad de sus prestaciones sociales tomando como base para el cálculo la bonificación judicial mencionada anteriormente. Sin embargo, la entidad demandada negó la petición mediante Oficio- radicado 20223100008921 del 15 de marzo de 2022.
3. Finalmente, la actuación administrativa fue agotada mediante la interposición del recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante oficio 2-0507 del 9 de mayo de 2022, por medio del cual, se confirma la negativa a la solicitud elevada por la demandante.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LAS PRETENSIONES

Constitucionales:

- Artículos 1, 4, 13, 25,29, 53, 93,150, 209 y 228 de la Constitución Política.

Legales:

- Ley 4ª de 1992, Ley 21 de 1082, Ley 50 de 1992, Ley 270 de 1996, Ley 319 de 1996, Decreto 0382 de 2013 y Código Sustantivo del Trabajo.

CONCEPTO DE VIOLACIÓN

El apoderado de la parte actora señaló que los actos administrativos demandados infringen los fundamentos jurídicos citados haciendo alusión a la normatividad y a los criterios jurisprudenciales que, a su juicio, le imponen la obligación al Gobierno Nacional y a la entidad demandada de reconocer la bonificación judicial como base de liquidación para la totalidad de las prestaciones sociales.

En este sentido, indica que la asignación salarial establecida por la entidad bajo estos términos implica un trato desigual, en la medida que la bonificación judicial, al tratarse de una contraprestación directa del servicio y no de un beneficio adicional, cumple con los requisitos establecidos en los instrumentos nacionales e

internacionales para ser considerada como salario en todos los casos, incluyendo en el cálculo de las prestaciones.

En virtud de lo anterior, concluye que los actos administrativos emitidos por la entidad demandada son contrarios a la ley vigente y por lo tanto se debería declarar su nulidad.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Notificado el auto admisorio, la Fiscalía General de la Nación constituyó apoderado judicial, quien mediante correo del 10 de octubre de 2022 allegó contestación de la demanda oponiéndose a las pretensiones de la misma y precisando que conforme con la jurisprudencia constitucional, el legislador cuenta con la facultad de excluir o modular mediante las disposiciones normativas de los regímenes especiales, algunas sumas de dinero que habitualmente son percibidas por los trabajadores como retribución por sus servicios para efectos de liquidar determinadas prestaciones sociales, sin que lo anterior, constituya una vulneración expresa del artículo 53 constitucional.

En este sentido, la disposición contenida en el Decreto 382 de 2013 es conforme con la legislación vigente, en la medida que la modulación de los efectos salariales de la bonificación no dejan en situación de desprotección al trabajador, sino contrario sensu, es expresión del mandato de equilibrio fiscal que obligatoriamente se debe tener en cuenta en el régimen salarial y prestacional especial de los servidores públicos, en razón del impacto que sus salarios y prestaciones sociales tienen en la política económica general.

Adicionalmente, explica que el salario no es un dogma constitucional sino una definición legal cuyo contenido no se limita a lo establecido en el Convenio 95 de la OIT. En razón de lo anterior, los rubros que lo conforman son los definidos por el legislador, bajo la advertencia de que esto no implica el reconocimiento automático de los mismos como base de liquidación de los beneficios laborales. En ese orden de ideas, si bien la bonificación se trata de un pago salarial, ésta puede excluirse del cómputo de la liquidación de las prestaciones sociales, toda vez que no existe un motivo constitucional que impida al legislador disponer que una determinada prestación social se liquide sin tomar en cuenta la totalidad salarial.

Por último, señala que los actos demandados se limitan a dar cumplimiento a un deber legal que le impuso el legislador a la Fiscalía General de la Nación a través del Decreto 0382 de 2013, el cual cuenta con plena vigencia y validez jurídica al ceñirse a la Constitución y la Ley.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante auto de fecha 29 de marzo de 2023 se corrió traslado a las partes y al representante del Ministerio Público por el término de 10 días, para que formularan sus alegatos de conclusión y rindiera concepto de fondo, respectivamente, de conformidad con lo previsto en el Artículo 181 de la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021.

Parte actora: Dentro del término mencionado, a través de correo electrónico del 31 de marzo de 2023 presentó alegatos de conclusión reiterando la normatividad y los criterios jurisprudenciales que se infringen a través del reconocimiento limitado de del carácter salarial de la bonificación judicial únicamente para efectos de cálculo y deducción de los valores correspondientes a salud y pensiones. Asimismo, sostiene que en el presente caso le corresponde a la autoridad judicial inaplicar las disposiciones demandadas por la evidente contradicción de las mismas con las normas constitucionales, así como declarar la nulidad y el restablecimiento del derecho.

Vencido el término mencionado, la Nación- Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público se abstuvieron de emitir concepto alguno.

CONSIDERACIONES

De la revisión de las piezas procesales, se observa que se surtieron en su totalidad las etapas del proceso ordinario sin que se presenten causales de nulidad de lo actuado, siendo ostensible en estas circunstancias proceder a proferir la decisión que merezca la Litis.

1. La controversia:

En el presente proceso se debate la legalidad de los actos administrativos: i) Oficio con radicado No. 20223100008921 del 15 de marzo de 2022, suscrito por el profesional con funciones del departamento de administración de personal (a) de la Fiscalía General de la Nación y ii) La Resolución 2-0507 del 9 de mayo de 2022, suscrita por el subdirector de talento humano de la Fiscalía General de la Nación, mediante los cuales se negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a que tiene derecho el demandante y que son liquidadas con fundamento en el salario básico con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial.

2. Problema Jurídico:

Se circunscribe a determinar si el demandante, tiene derecho a que por esta instancia judicial y a través del control concreto de constitucionalidad, se inaplique parcialmente el Decreto 382 de 2013, específicamente la parte que señala que la bonificación "constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud" y demás normas que lo modifican; y en consecuencia, se ordene la reliquidación de todas las primas legales y extralegales devengadas, prima de servicio, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías, intereses a la cesantías y demás causadas a partir del 1 de agosto de 2017, teniendo en cuenta la bonificación judicial creada por el mencionado Decreto.

3. Marco Jurídico de la Bonificación Judicial de la Fiscalía:

La Carta Política de 1991, en su artículo 150, numeral 19, literal e) y en los artículos 20 y 50 transitorios, preceptúa:

"Art. 150. Corresponde al Congreso hacer las Leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos:

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública.

Art. 20. El gobierno nacional, durante el término de dieciocho meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución y teniendo en cuenta la evaluación y recomendaciones de una comisión conformada por tres expertos en la administración pública o derecho administrativo designados por el Consejo de Estado; tres miembros designados por el gobierno nacional y uno en representación de la Federación Colombiana de Municipios, suprimirá, fusionará o reestructurará las entidades de la rama ejecutiva, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta del orden nacional, con el fin de ponerlas en consonancia con los mandatos de la presente reforma constitucional y, en especial, con la redistribución de competencias y recursos que ella establece.

Art. 52. A partir de la entrada en vigencia de esta constitución, la Comisión Nacional de Valores tendrá el carácter de Superintendencia. El Gobierno Nacional dispondrá lo necesario para la adecuación de dicha institución a su nueva naturaleza, sin perjuicio de lo que al respecto podrá disponer el gobierno en desarrollo de lo establecido en el artículo 20 transitorio."

Conforme la disposición en cita se tiene que, para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, existe una competencia compartida entre el Legislador y el Ejecutivo.

Ahora bien, en cumplimiento de ese mandato constitucional en el año 1992 el Congreso de la República, expidió la Ley 4 "Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos (...)", dicha disposición facultó al Presidente de la República a efectos que regulará el régimen laboral de los servidores públicos, incluidos los servidores de la recién creada Fiscalía General de la Nación.

En desarrollo de las facultades conferidas por la Ley 4 de 1992, el Presidente expidió el Decreto 053 de 1993 "Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones", a través del cual se fijó el régimen salarial de los servidores públicos vinculados a la entidad con posterioridad a la vigencia de dicha norma y extensivos a quienes se acogieren y vinieran con el régimen contenido en el Decreto 2699 de 1991.

En el año 2013, el Gobierno expidió el Decreto 382 de 6 de marzo de 2013 "Por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones", en el artículo 1¹ de dicho cuerpo

¹ ARTÍCULO 1o. Créase para los servidores de la Fiscalía General de la Nación a quienes se aplica el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto número 53 de 1993, y que vienen rigiéndose por el Decreto número 875 de 2012 y por las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1o de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año, al valor que se fija en la siguiente tabla:

normativo se reconoció a partir del 1 de enero de 2013, una bonificación mensual para todos los servidores de la entidad, cuyos valores a reconocer fueron discriminados año por año hasta el 2018, debiéndose reajustar anualmente a partir del 2014 hasta el 2018, el valor que resultare de diferencia entre el 2% del IPC ya ajustado y el que efectivamente se causara de acuerdo a las certificaciones expedidas por el DANE. Constituyendo únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Así mismo, se precisó en el mentado Decreto que a partir del año 2019 y siguientes, el valor de la bonificación sería el de la bonificación equivalente a la recibida en el año anterior, ajustado con el IPC y con respecto a los funcionarios y empleados que no optaron por el régimen del Decreto 53 de 1993, en el artículo 2 del Decreto 382 de 2013, se estableció que percibirían a título de bonificación judicial la diferencia en caso de percibir un ingreso total anual inferior respecto de quien ejerce el mismo empleo, mientras permanecieran vinculados al servicio.

4. Caso Concreto:

En el presente asunto, el demandante pretende que se le reconozca la bonificación judicial creada mediante Decreto 382 de 2013, como factor salarial a efecto que le sean reliquidadas sus prestaciones sociales devengadas desde el 01 de agosto de 2017 en adelante.

Frente al asunto planteado, debe precisarse *prima-facie* que el concepto salario, está constituido por todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el trabajador como contraprestación directa del servicio, ya sean percibidas en dinero o especie². Aspecto que fue desarrollado por el H. Consejo de Estado³ en reciente sentencia del 06 de abril de 2022, en la que señaló que existe una sólida línea jurisprudencial proferida por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la cual desarrolla el carácter salarial de la mencionada Bonificación Judicial, al analizar el concepto de salario, la noción de factor salarial y los criterios que permiten concluir que esta prestación reúne

PARÁGRAFO. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC); en consecuencia, no le aplica el incremento que fije el Gobierno Nacional para las asignaciones básicas en el año 2013 y siguientes.

A partir del año 2014 y hasta el año 2018, los valores señalados en las tablas del presente artículo contienen un ajuste equivalente a una variación proyectada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la bonificación judicial asignada en el año inmediatamente anterior.

En el evento en que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para las vigencias fiscales de los años 2014 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%) proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno Nacional ajustará las tablas correspondientes para la respectiva vigencia en la diferencia que se presente.

Para el año 2019 y en adelante el valor mensual de la bonificación judicial será equivalente al valor que se perciba en el año inmediatamente anterior reajustado con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

² Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Segunda- Subsección B. Sentencia del 28 de septiembre de 2016. MP: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

³ Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda. Radicado No. 76001233300020180041401 (0470-2020). Fecha: 06 de abril de 2022. Conjuéz Ponente Dr. Carmen Anaya de Castellanos.

todos los requisitos del salario, ya que sin perjuicio de la denominación que se le atribuya, todo pago habitual que reciba el trabajador en contraprestación de su servicio personal constituye salario, incluidas las bonificaciones habituales.

En virtud lo anterior, concluyó la Alta Corporación lo siguiente:

"En este orden de ideas, para la Sala es claro que la bonificación judicial creada mediante Decreto No. 0382 de 2013, al ser un pago que reciben los empleados y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, de forma habitual y periódica en contraprestación a sus servicios, no habría motivo alguno para desconocer su carácter salarial, máxime si se tiene en cuenta que fue creada precisamente para materializar una nivelación salarial dispuesta en una Ley marco. Aceptar lo contrario, implicaría desconocer abiertamente los límites a la facultad otorgada por el Congreso al Gobierno Nacional y desatentar principios de rango constitucional como la progresividad, la primacía de la realidad sobre las formas y los límites protectores señalados por el Constituyente en el artículo 53 de la Carta Política".

De la citada providencia, se colige que la tesis acogida por el órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dispone que constituye salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución directa por la prestación de sus servicios, independientemente la denominación que se le dé.

Lo anterior, implica que al ser la bonificación judicial una suma que periódicamente perciben los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación como consecuencia de la retribución directa del servicio que prestan en la institución, esta constituye salario, y, por lo tanto, tiene incidencia prestacional a partir de su reconocimiento y de forma sucesiva hacia futuro, esto es, desde el año 2013 en adelante.

En ese contexto se tiene que el Decreto que dispuso que la Bonificación Judicial percibida por los servidores de la Fiscalía General de la Nación, no constituía salario, desconoce el principio de progresividad plasmado en el artículo 53 de la Carta Política, toda vez que las llamadas primas y bonificaciones representan un incremento remuneratorio del salario vigente de los servidores públicos, y la decisión de excluirle su carácter salarial desconoce los principios constitucionales que protegen al trabajador. Conforme lo indicado, es dable concluir que la Bonificación por servicios prestados debe ser reconocida a los Servidores Públicos como factor salarial para efecto de liquidar las prestaciones sociales causadas, a partir del 1 de enero de 2013.

Ahora bien, en el presente caso, se tiene acreditado que el señor RODRIGO ABADÍA MONDRAGÓN, ingresó a laborar en la Fiscalía General de la Nación desde el 01 de agosto de 2017, desempeñándose a la fecha de presentación de la demanda como Profesional de Gestión II, devengando los siguientes emolumentos mensualmente: sueldo básico y bonificación judicial (Fl. 25 del Archivo 7).

Igualmente, se tiene que, el régimen salarial aplicable al servidor demandante es el contenido en el Decreto 053 de 1993 y no se le liquidaron sus prestaciones teniendo en cuenta la bonificación judicial, sustentado en los Decretos 382 de 2013, 022 de 2014, 1270 de 2015, 247 de 2016, 1015 de 2017, 341 de 2018 y demás complementarios, lo cual a todas luces desconoce los postulados superiores citados en precedencia, pues se reitera se trata de una remuneración mensual que percibe el trabajador como contraprestación a su servicio, y por lo tanto, debe reconocerse como

parte del salario a efecto que le sea tenido en cuenta al momento de liquidarse los demás emolumentos que perciba.

Conforme lo antes expuesto, lo procedente en el *sub-lite*, es decretar la nulidad de los actos acusados, y, en consecuencia, ordenar a la Fiscalía General de la Nación que reliquide las prestaciones sociales que sean liquidadas con fundamento en el salario básico devengadas por el señor RODRIGO ABADÍA MONDRAGÓN, teniendo en cuenta para el efecto además del salario básico la bonificación judicial creada mediante Decreto 382 de 2013, la cual percibe desde el 01 de agosto de 2017.

En consideración a lo anterior, habrá lugar a inaplicar el Decreto 382 de 2013, modificado por el Decreto 022 de 2014, 1270 de 2015, 247 de 2016, 1015 de 2017, 341 de 2018 y demás complementarios, única y exclusivamente en lo que se refiere a que no dispusieron el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial, pues desconocen lo que la jurisprudencia ha definido como salario.

En este orden de ideas, se tiene que la Fiscalía General de la Nación deberá proceder a reliquidar las prestaciones sociales devengadas por el demandante, que sean liquidadas con fundamento en el salario básico, incluyendo para el efecto la Bonificación Judicial, ya que esta debe considerarse como parte del salario, razón por la cual resulta evidente que los actos acusados están viciados de nulidad y las pretensiones de la demanda tienen vocación de prosperar.

5. Restablecimiento del Derecho:

La reliquidación de cesantías y demás prestaciones sociales. Se ordenará a la Fiscalía General de la Nación que proceda a reliquidar las cesantías y demás prestaciones sociales devengadas por el demandante y que sean liquidadas con fundamento en el salario básico, desde el 01 de agosto de 2017 y mientras se causen, teniendo en cuenta además del salario básico la Bonificación Judicial creada por el Decreto 382 de 2013 según el cargo desempeñado, descontando los aportes del sistema de seguridad social, sino se hubieren hecho, en la proporción que corresponda al accionante.

Prescripción Trienal. Se encuentra demostrado que el accionante elevó petición mediante radicado No. 20181190233672 del 24 de febrero de 2022 (Fl. 16, archivo 7), razón por la cual infiere este Despacho que el fenómeno de la prescripción trienal de que trata el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, tuvo ocurrencia sobre los reajustes salariales ocasionados con anterioridad al 24 de febrero de 2019.

El ajuste al valor. Las sumas a reconocer y pagar serán actualizadas de conformidad con lo previsto en el artículo 187 la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta para ello las fechas de causación y de pago efectivo de las mismas.

En consecuencia, se deberá aplicar la fórmula establecida por la Sección Tercera del H. Consejo de Estado aplicada por la Sección segunda de la alta corporación a saber:

$$R = Rh \times \frac{\text{Índice final}}{\text{Índice inicial}}$$

En donde el valor (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por la parte actora desde la fecha a partir de la cual se originó la obligación, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE vigente a la fecha de la ejecutoria de la sentencia por el índice inicial vigente a la fecha en que debía hacerse el pago.

Los intereses. Se pagarán intereses en cuanto se den los supuestos de hecho previstos en el Art. 192 de la Ley 1437 de 2011.

Respecto de las **COSTAS**, considerando que la entidad demandada no observó una conducta dilatoria o de mala fe dentro de la actuación surtida dentro de este proceso, no procede la condena en costas. Esta evaluación se realiza con fundamento en lo ordenado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá- Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO. - INAPLICAR por inconstitucional, la palabra “únicamente” contenida en el párrafo final del artículo 1 del Decreto 382 de 2013, para los efectos inter partes del proceso promovido por el señor RODRIGO ABADÍA MONDRAGÓN identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.356.645, contra la **NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, a fin de considerar que la bonificación judicial sí constituye factor salarial para la base de liquidación de todas las prestaciones sociales y cotizaciones de aportes al Sistema General de Pensiones y Sistema General de Seguridad Social en Salud, a que tiene derecho el demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de la decisión.

SEGUNDO. - DECLARAR LA NULIDAD de los actos administrativos ii) Oficio con radicado No. 20223100008921 del 15 de marzo de 2022, suscrito por el profesional con funciones del departamento de administración de personal (a) de la Fiscalía General de la Nación y ii) La Resolución 2-0507 del 9 de mayo de 2022, suscrita por el subdirector de talento humano de la Fiscalía General de la Nación, mediante los cuales se negó la reliquidación de las prestaciones sociales a que tiene derecho el demandante con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. - Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad, a título de restablecimiento de derecho, **CONDENAR** a la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, a reliquidar las cesantías y demás prestaciones sociales que sean liquidadas con fundamento en el salario básico, devengadas por el señor RODRIGO ABADÍA MONDRAGÓN identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.356.645, desde el 01 de agosto de 2017 y mientras se causen, teniendo en cuenta además del salario básico la bonificación judicial, descontando los aportes al sistema de seguridad social, que no se hubieren hecho, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la decisión.

CUARTO. - El valor que resulte adeudado a la parte actora, deberá ser reajustado en los términos previstos en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO. -DECLARAR prescritos los reajustes salariales ocasionados con anterioridad al 24 de febrero de 2019, conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEXTO. - A la sentencia se le dará cumplimiento dentro del término señalado en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, y los valores que resultaren a deberse deberán actualizarse en la forma dispuesta en el artículo 187 del mismo estatuto y en los términos señalados en la parte motiva.

SÉPTIMO. - No hay lugar a condenar en costas.

OCTAVO. - Ejecutoriada la presente providencia expídanse copias a las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del Código General del Proceso.

NOVENO. - La presente providencia se notifica a las partes de conformidad con el artículo 203 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 243 y 247 ibídem.

CÓPIESE, NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTHA HELENA QUINTERO QUINTERO

JUEZ

VBT

Firmado Por:
Martha Helena Quintero Quintero
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
015
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **76a5f23b79e00f10fc3e5a973588b6f8a810cadc14c32daca38694efe4ec6f5**

Documento generado en 28/04/2023 03:35:00 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>